

**AL SUBSECRETARIO (PRESIDENTE, DIRECTOR) DEL
MINISTERIO (ORGANISMO AUTÓNOMO, AGENCIA)**

D/Dña +++++, con DNI nº, domiciliado/a a efectos de notificaciones en, calle nº, como funcionario del Cuerpo con número del Registro de Personal, ante V.E. comparezco y, como mejor proceda en Derecho, digo

Que por el presente escrito interpongo RECURSO ADMINISTRATIVO contra la nómina del mes de XXXXXXX de XXXX por la que se reducen las retribuciones que me corresponden como funcionario para este ejercicio económico, en aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (publicado en el BOE del 24 y posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados) y de la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (publicada en el BOE del 26).

Que fundo este recurso en los siguientes

H E C H O S

Sin previa notificación al que suscribe, el órgano administrativo competente ha aplicado en la nómina recurrida la reducción económica a que se refieren las disposiciones de carácter

general citadas en el encabezamiento respecto a las previstas para todo el ejercicio y que correspondían percibir, conforme a lo establecido en los vigentes Presupuestos Generales del Estado.

Dicha reducción retributiva, se refleja en la nómina recurrida (**DOCUMENTO N°1** aportado junto con el presente escrito).

A los anteriores Hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

-FUNDAMENTOS JURÍDICO-PROCEDIMENTALES:

I. Legitimación para recurrir:

Conforme a lo prevenido en el artículo 31. 1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el recurrente ostenta la condición de interesado, habida cuenta que la decisión adoptada en el procedimiento de referencia afecta negativamente a mis derechos económicos como funcionario.

II. Procedencia del recurso:

El acto que ahora se recurre no pone fin a la vía administrativa, al tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado –LOFAGE–, Ley 6/1997, de 7 de abril, por lo que debe ser recurrido en alzada ante el superior jerárquico de quien lo dictó. Así resulta de lo establecido en el artículo 114.1 de la mencionada Ley 30/1992.

Si no fuera así, si se considerara que el acto recurrido sí agota la vía administrativa, habida cuenta lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 30/1992, la Administración debe tratar el recurso administrativo según su verdadero carácter y, por tanto, considerarlo recurso potestativo de reposición, tramitándose según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992.

III. Interposición del presente recurso en tiempo y forma:

El recurso administrativo que se formaliza en este escrito se interpone dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha en la que quien suscribe tuvo conocimiento de los actos perjudiciales a sus derechos subjetivos, a través del conocimiento que tuvo de su nómina del mes. Dicha nómina no ha sido notificada al interesado mediante procedimientos que puedan dejar constancia de su recepción.

De otra parte, en el presente escrito se consignan las formalidades a que se refiere el artículo 110.1 de la tan mencionada Ley 30/1992.

FUNDAMENTOS JURÍDICO-MATERIALES:

Primero.- A modo de introducción El acto recurrido, si bien constituye una concreción del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, (y de la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 25 de mayo de 2010, citada en el encabezamiento) singularmente en lo referido a la modificación del artículo 24 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, **supone un acto de aplicación de una norma que quien suscribe considera contraria al ordenamiento jurídico, por contravenir, como más adelante se razonará, determinados preceptos constitucionales y normas con rango de Ley dictadas en desarrollo directo de los derechos fundamentales y libertades públicas y de los derechos de los ciudadanos, contemplados en el Capítulo II del Título I de la Constitución Española.**

Es por ello que, mediante el presente recurso de alzada se viene a plantear el recurso administrativo como preparatorio de un recurso contencioso-administrativo en el que se pedirá al órgano jurisdiccional el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 8/2010.

Segundo.- Vulneración del artículo 37 de la CE, donde se reconoce el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, así como los pactos alcanzados con los Sindicatos más representativos vienen a avalar la conservación de las retribuciones salariales de los abajo firmantes **en las condiciones fijadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010.**

En efecto, si bien es cierto que una norma con rango de ley (como ocurre con los Reales Decretos Leyes) puede derogar otra anterior del mismo rango normativo, lo cierto es que, **en primer lugar**, el Real Decreto Ley no deroga dicha Ley 7/2007, sino que la exceptúa tácitamente en cuanto a su aplicación, sin modificar su articulado y, **en segundo lugar**, no contempla que dicha Ley 7/2007 integra el bloque de la constitucionalidad, al ser desarrollo directo e inmediato del derecho a la negociación colectiva laboral que también tienen los funcionarios para fijar paccionadamente sus condiciones de trabajo con los órganos competentes de las Administraciones Públicas de las que dependen, vulnerando por tanto no sólo la Ley, sino directamente el artículo 37 de la Constitución.

En efecto, el Gobierno, pocos meses atrás, suscribió con los Sindicatos más representativos el Acuerdo de 25 de septiembre de 2009 (BOE de 26 de octubre), donde se consagra el principio de mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios y donde se contenía una subida de masa salarial del 0,3% para el ejercicio 2010 (y otras para ejercicios venideros) que después incorporó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Tajantemente debe **afirmarse que el Acuerdo y la Ley citados no dieron lugar a meras expectativas, por lo que a las retribuciones se refiere, sino a auténticos derechos subjetivos que**, por su propia naturaleza, se integraron en la esfera jurídica y patrimonial de los interesados.

En otras palabras, al menos por lo que se refiere a 2010, quienes abajo suscriben, ostentaban un derecho legítimo a un determinado nivel retributivo, por haber sido este fijado en la ley por un plazo concreto y determinado. Sin que ello pueda verse contradicho con el carácter condicional de la relación estatutaria de los funcionarios públicos, el *ius variandi* o la potestad autoorganizatoria de la administración, pues todos ellos se refieren

únicamente a la posibilidad de que la Administración modifique, en aras del interés público, ciertas expectativas futuras (entre ellas las expectativas de crecimiento económico) de los trabajadores vinculados a ella por una relación estatutaria, **pero nunca la cercenación pura y simple de derechos subjetivos consolidados**. La existencia de un derecho al sueldo (y al mantenimiento de éste, aunque no a su aumento), por parte de los funcionarios, ha sido reconocida por una nutrida jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo (SS de 21 septiembre 1999, 30 de diciembre de 1998, 14 de octubre de 1996, 19 de febrero de 1996 o 29 de mayo de 1995) así como del Tribunal Constitucional (SS 99/87, 108/86, 70/88).

Por otra parte, y en paralelo con lo anterior, tanto el artículo 37 de la Constitución Española como el 31 del Estatuto Básico del Empleado Público (que constituye un desarrollo directo de aquel) reconocen la capacidad de negociación colectiva para la determinación de las condiciones de trabajo. Asimismo, el citado artículo enuncia unos principios generales que, como consecuencia del Real Decreto impugnado en el presente recurso, han sido frontalmente infringidos. Además, en el artículo 33 del último texto normativo citado se dice, por su parte, que **la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia**. Ha de reconocerse que dichos principios, como consecuencia del Real Decreto impugnado, han quedado igualmente violentados.

Y más aún, en su artículo 38.10, la Ley 7/2007 señala que **se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público, añadiendo que, en este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación**. Dicho precepto ha sido, sencillamente, ignorado por la norma en la que se fundamenta el acto recurrido, por las siguientes razones:

1.- Según el citado precepto, debería haber sido el órgano de negociación y no el Gobierno, quien dejase en suspenso los acuerdos.

2.- Además, la aplicación del Real Decreto Ley impugnado, supone la anulación y privación total de efectos de dichos acuerdos, en lugar de su suspensión temporal o su modificación, tal y como se desprende del Estatuto Básico del Empleado Público.

3.- La posibilidad de suspensión o modificación que tiene el órgano competente debe ser excepcional y fundarse en la existencia de una causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas. Alteración, como es obvio, que se ha de producir después de que dichos Acuerdos son suscritos. Ninguna motivación, en este sentido, se contiene ni en la Exposición de Motivos ni en el articulado del mencionado Real Decreto Ley, explicando en qué medida se han alterado sustancialmente las condiciones económicas de déficit público, desde el día 25 de septiembre de 2009 (fecha del Acuerdo), o desde el día 1 de enero de 2010 (fecha de su aprobación por el Congreso de los Diputados en la Ley de Presupuestos), hasta el día 20 de mayo de 2010 (fecha del Real Decreto Ley).

4.- La suspensión o modificación de lo convenido, por último, debe realizarse en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. O sea que, en este sentido, también se aprecia una palpable falta de motivación por parte del Real Decreto Ley, puesto que el Gobierno debería haber justificado que esta medida en concreto (y no otras posibles relativas a la reducción de diversas partidas presupuestarias, al tenor de sus líneas de dirección política), son las idóneas y las necesarias para que estrictamente se salvaguarde el interés público relativo al ahorro en el gasto público. Si, a título meramente dialéctico, se admitiera ésta como la única medida posible (o la más idónea), a su vez, se debería haber motivado por qué la reducción debe serlo en esta exacta medida en relación al ahorro presupuestario que supone, prescindiendo aquí de lo absurdo de que el recorte sea regresivo entre los funcionarios según el Grupo al que pertenecen, cuestión que se desarrollará después en motivo aparte.

Por su parte, el párrafo 11 del citado artículo 38 señala que, salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes; y, finalmente, el apartado 12 señala que la vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos, una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.

Así pues, aún a riesgo de resultar reiterativos, por resumir los argumentos, tenemos que señalar que:

1.- El Real-Decreto ley de 20 de mayo de 2010 vendría a vulnerar, en primer lugar, el principio de fuerza vinculante de los contratos libremente perfeccionados entre las partes, sin establecer medida compensatoria alguna respecto a los derechos que expropia a los funcionarios. **Contratos o acuerdos que se producen, además, en el seno de la negociación colectiva laboral consagrada en el artículo 37 de la Constitución.** La vulneración de los Acuerdos Administración-Sindicatos, no sólo supone, además, una infracción del EBEP, sino también de la Ley de Presupuestos Generales de 2010, habida cuenta de que aquel Acuerdo requería para su validez y eficacia que fuera ratificado por las Cortes Generales mediante su incorporación a la LPGE (conforme a lo dispuesto en el art. 38.3 del propio EBEP) y que efectivamente el Parlamento ratificó a través de la aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2010.

2.- El Real-Decreto ley vulnera, además, el principio de buena fe negocial, **ya que, como ya se ha dicho y más adelante se abundará en ello, al tratar el artículo 86 de la Constitución, las circunstancias excepcionales invocadas, no se refieren a ninguna que no existiese también ocho meses atrás (o cinco, a contar desde 1 de enero), es decir, en el momento de suscribir o aprobar el Acuerdo.**

3.- Los principios de obligatoriedad y transparencia serían también vulnerados por el Real Decreto Ley, al anularse de facto, pocos meses después, lo previamente pactado, incumpliendo una de las partes negociadoras aquello a lo que se comprometió y no habiéndose dado publicidad alguna ni audiencia en la tramitación del proyecto de RDL a la otra parte negociadora, tal y como exige el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público.

4.- No existe, según lo expuesto con detalle más arriba, la más mínima justificación de la alteración sustancial de las condiciones económicas tras la firma del Acuerdo y hasta el dictado del Real Decreto Ley, ni tampoco que sea esta medida estrictamente necesaria para la salvaguarda del interés público. Se anula por completo el contenido del Acuerdo, no se suspende o modifica y se adopta la decisión por quien no es competente para hacerlo.

5.- Ha de añadirse que, si bien mediante un Real Decreto Ley puede modificarse el texto de una ley ordinaria, como es el Estatuto Básico del Empleado Público, no puede dejar sin efecto, sin más, un derecho constitucional del que dicho Estatuto es un desarrollo directo; podría, en su caso, haber modificado el articulado del EBEP pero no exceptuar su aplicación en un concreto ejercicio.

6.- Además, comoquiera que mediante el Acuerdo Administración-Sindicatos se adquirieron derechos consolidados por los funcionarios, la Administración debería haber recurrido a la declaración administrativa de lesividad y ulterior impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de cada una de las nóminas en las que se cercenan dichos derechos subjetivos, tal y como dispone el artículo 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Téngase en cuenta, en este sentido, el Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1995).

Tercero.- Infracción del requisito de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86 de la Constitución Española. Sin perjuicio de lo que más adelante se desarrollará, conviene apuntar, en primer lugar, que el requisito de la extraordinaria y urgente necesidad exigido por el artículo 86 de la Constitución Española no se compagina con la evidente y constatada existencia, de general conocimiento, de un déficit manifiesto en las cuentas públicas desde hace más de dos años, ni con el hecho de que tan sólo ocho meses atrás, el Gobierno firmase con los Sindicatos más representativos un acuerdo que suponía un sustancial incremento de sus partidas retributivas, confirmado por las Cortes Generales. Tampoco la extraordinaria y urgente necesidad a que se refiere el art. 86 de la Constitución Española puede ser abstracta y genérica, sin que en la Exposición de Motivos de Real Decreto impugnado se concreten suficientemente las

causas de la adopción de tales medidas y no otras alternativas. En este sentido, el Sindicato FEDECA ha propuesto una gran cantidad de medidas de ahorro presupuestario alternativas, que se aportarán al recurso contencioso-administrativo y de las que han dado cuenta ampliamente los medios de comunicación social.

En relación con lo anterior, es decir con el hecho de que las causas extraordinarias, de índole económica, no pueden considerarse de ningún modo sobrevenidas, sino en todo caso anteriores a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 se plantea la cuestión de la vulneración, por parte del Real Decreto Ley de 20 de mayo de 2010 de otro precepto constitucional, como es el artículo 86 de nuestro texto fundamental.

Según dicho precepto:

“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general.

2. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.

Dos puntos habrían de ser resaltados en relación con el **ámbito procedimental y material** de los Reales Decretos Leyes.

En primer lugar ha de concurrir una **situación de extraordinaria y urgente necesidad**. En segundo lugar, dichas normas con rango de Ley **no podrán regular**, entre otras

materias, **los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución.**

Con respecto a la **primera cuestión** apuntada, cabe sostener que, en el caso que nos ocupa, la extraordinaria y urgente necesidad no aparece suficientemente justificada. Si bien es cierta y notoria la situación de crisis económica no puede negarse que, desde la perspectiva de la contabilidad pública, dicha situación se conoce desde hace al menos dos años, sin que se haya patentizado, hasta el momento, por parte del Gobierno, la existencia de una situación de urgente y extraordinaria necesidad. Por ello habría sido necesaria, para la legitimidad de la norma, una explicación, una fundamentación racional o una justificación, plasmada en la Exposición de Motivos, de la alteración sustancial de las cuentas públicas (en el período en el que la norma vino a dictarse) para poder sostener la concordancia de la misma con las exigencias del artículo 86 de la Constitución. Pues bien en dicha Exposición de Motivos, sólo se alude, imprecisa y elusivamente, a la evolución de la coyuntura económica, a los compromisos adoptados con la Unión Europea, o a la distribución equitativa del esfuerzo entre la Sociedad, **pero nunca se justifica, de un lado, por qué se adoptan dichas medidas restrictivas y, de otro lado, por qué se decide el mantenimiento de otros gastos presupuestados, cuya reducción o eliminación podría repartir de modo más equitativo el peso de una determinada coyuntura económica adversa.** Así pues cabría preguntarse ¿Cuáles son esas circunstancias extraordinarias sobrevenidas desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2010 que han determinado la necesidad de acudir a esta vía de urgencia prevenida en el artículo 86.1 de la CE?

Hace escasos meses que el Gobierno pactó con los Sindicatos más representativos una subida del sueldo de los funcionarios de un tanto por ciento para un determinado período, de donde cabría preguntarse, ¿cómo es posible que, sin que conste una alteración sustancial de las cuentas públicas desde que tuvo lugar dicho pacto pueda predicarse del momento presente, y no de meses atrás, la concurrencia de causas de extraordinaria y urgente necesidad? Y en consonancia con el argumento anterior, habida cuenta de la falta de constancia de una alteración sustancial de las cuentas públicas en los últimos meses y de la ausencia de una situación de marcada diferencia entre la situación económica actual y la de pocos meses atrás, cabría también preguntarse si la situación más acorde con la legalidad, desde los múltiples puntos de vista examinados a lo largo

del presente recurso, no podría compaginarse mejor con respetar lo pactado y aguardar los escasos meses que faltan para el inicio de la tramitación ordinaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 (En este sentido conviene referirse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se refiere, entre otras, en la Sentencia 60/86 o 68/2007 a la necesaria concurrencia del elemento de la imprevisibilidad para acudir a la vía del Decreto Ley, siendo inconcebible que la situación que teóricamente funda las medidas adoptadas en el RDL fuera difícil de prever. Por su parte según la STC 155/2005 la infracción del requisito de la extraordinaria y urgente necesidad no puede obviarse por el hecho de que un Real Decreto haya sido convalidado por el legislador).

En cuanto a la **segunda cuestión** apuntada, la del **ámbito material** del Real Decreto Ley, ha de tenerse en cuenta que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 86 de la CE, no sólo están excluidos del mismo los derechos y libertades fundamentales regulados por los artículos 14 a 29 de la CE, sino todo el Título I, es decir, todos los derechos de los ciudadanos, incluidos, naturalmente aquellos referidos a la negociación colectiva contemplados en el artículo 37 del texto fundamental.

Pues bien habida cuenta de que dicho derecho aparece configurado, plasmado o desarrollado en el Estatuto Básico del Empleado Público y toda vez que el Real Decreto Ley que nos ocupa está derogando, singularmente, dicho Estatuto en cuanto a la plasmación legislativa que opera del derecho constitucional a la negociación colectiva, es evidente **que el Real Decreto Ley de 20 de mayo de 2010 está incidiendo en los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el artículo 37 de la CE**. Y ello no de una forma tangencial o indirecta sino de una forma frontal y directa. No sólo por venir a derogar una norma que regula la negociación colectiva atribuida a un colectivo tan amplio y numeroso como son los funcionarios públicos sino también porque, previendo el propio Estatuto los cauces procedimentales a seguir para el caso de la aparición de circunstancias económicas sobrevenidas, el RDL impugnado ni siquiera sigue estos cauces procedimentales, sino que fija autónomamente otros cauces nuevos.

Desde una segunda perspectiva, habiéndose ya fundado que los funcionarios que permanezcan en sus puestos de trabajo en las Administraciones Públicas durante el ejercicio 2010 adquirieron en

septiembre de 2009 o, mejor, en 1 de enero de 2010 el derecho subjetivo a percibir las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente en su redacción originaria desde esta fecha hasta el 31 de diciembre de 2010, el RDL anula tales derechos subjetivos integrados ya en su patrimonio, violentando la protección constitucional derivada del reconocimiento de la propiedad privada en el artículo 33 del texto constitucional.

Por lo que resulta innegable que **el RDL que nos ocupa afecta a los deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, trascendiendo el ámbito material permitido en el artículo 86 de la Constitución Española y debiéndose considerar, por tanto, como una norma contraria al ordenamiento jurídico** (Han de tenerse en cuenta, en este sentido las SSTC 111/1983, 95/1988 y, muy singularmente, por su alcance en materia tributaria la STC 6/1983).

Cuarto.- Vulneración del artículo 134 de la CE y 133 a 135 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Desde una perspectiva procedimental, puede afirmarse también que el RDL que nos ocupa afecta al artículo 134 de la Constitución Española así como a los artículos 133 a 135 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de 24 de febrero de 1982.

Una vez más la norma impugnada rebasa el ámbito material y competencial concretado en la Constitución Española, como a continuación se razona. Ello ha de ponerse en consonancia, además, con las sentencias del Tribunal Constitucional (citándose en este sentido las SSTC 76/1992, 126/1987 o 65/1990) según las cuales a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado no pueden regularse cuestiones objeto de ley ordinaria, lo que motivó, hace años, que el Gobierno tuviera que confeccionar junto con la Ley de Presupuestos, las llamadas "Leyes de Acompañamiento", que subsisten en nuestros días aunque se enmascaren bajo otras denominaciones, aprobadas a finales de año).

Según el artículo 134 de la CE:

“1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea”.

De la transcripción del anterior precepto se deduce la existencia de una serie de equilibrios materiales y procedimentales, que requieren de un cauce “sui generis”, para su articulación, y que a su vez aparece plasmado en los artículos 133 a 135 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Una modificación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado por parte de un Real Decreto Ley, no se ha producido todavía en la historia legislativa española, lo cual no es óbice para sostener que el Real Decreto Ley no es el cauce adecuado para modificar el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, entre otras razones, porque ello supondría una vulneración de las especialísimas garantías procedimentales, que a nivel constitucional, debe acompañar a una norma que, como ocurre en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, supone la genuina vertebración económica de la acción gubernamental, el auténtico "indirizzo económico" del Estado, durante un año de la legislatura.

En este sentido, el Real Decreto Ley impugnado estaría no sólo modificando los preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado sino también vulnerando los principios generales interpretadores de la legalidad presupuestaria por parte de la jurisprudencia constitucional (precisamente fundamentados en la especialidad procedimental en la tramitación de la LPGE). Una interpretación contraria permitiría al Gobierno, después de haber negociado con los Grupos Políticos la LPGE, convertir en papel mojado todos sus compromisos por la vía del Real Decreto Ley.

Tampoco es admisible que de contrario se pueda argumentar que el RDL ha sido finalmente convalidado por el Congreso de los Diputados, subsanándose de este modo cualquier defecto en este sentido, dado que, según dispone el artículo 86 de la Constitución Española las facultades que el Congreso de los Diputados tiene en el trámite de convalidación del contenido del RDL están limitadas a su convalidación o no, sin que se pueda discutir, enmendar o modificar su contenido (lo que, caso de plantearse, debe hacerse a través de la tramitación del RDL como proyecto de ley por el trámite de urgencia, lo que no se ha hecho en este caso y sí, por ejemplo, en el RDL 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo). De este modo, la vulneración fraudulenta del procedimiento especial para la aprobación de la LPGE es total, porque no es ya sólo que no se haya seguido el procedimiento especial establecido constitucionalmente al efecto de aprobar la LPGE, es que ni siquiera se ha seguido el procedimiento para la aprobación de leyes ordinarias, sea el ordinario, sea el urgente.

De aceptarse la legalidad del Real Decreto Ley que nos ocupa, se relegaría a mero papel mojado el conjunto de garantías procedimentales, que suponen la necesidad de alcanzar profundos consensos políticos a un Gobierno en minoría en la Cámara baja, de que se haya revestida la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, lo que llevaría a permitir, de una forma generalizada, que el Gobierno, una vez conseguidos los correspondientes apoyos parlamentarios y una vez tramitada a través de su complejo procedimiento la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pudiera alterar, "fraudentemente", mediante un acto de autoridad unilateral, sus preceptos, mediante un Real Decreto Ley.

Ha de tenerse en cuenta, además, que del párrafo 5 del artículo 134 de la CE (*"Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario"*) parece deducirse, a *"contrario sensu"* una cierta intangibilidad, una necesaria inmodificabilidad durante el ejercicio presupuestario, del resto de las partidas que conforman el Presupuesto, en aquellas materias que, como ocurre con la que nos ocupa, no impliquen una alteración que suponga un aumento del gasto público ni una disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. La modificación operada por vía de Real Decreto Ley vulneraría por lo tanto la interpretación de la norma constitucional.

Incluso, un RDL, correctamente fundado en la existencia de causas de extraordinaria y urgente necesidad (extremo que niega categóricamente quién suscribe) y dictado legítimamente dentro del ámbito de sus competencias materiales (que tampoco es el caso que nos ocupa, como ya ha quedado expuesto) podría decretar la indisponibilidad de ciertos créditos previstos en los Presupuestos Generales del Estado, pero no proceder a una modificación del texto de los artículos de la Ley de Presupuestos, máxime cuando se trata de una modificación de la intensidad cuantitativa y cualitativa como la operada por el Real-Decreto ley de 20 de mayo de 2010.

En concordancia con lo anterior, además, ha de señalarse que las modificaciones presupuestarias que pueden llevarse a cabo durante la vigencia de los presupuestos, según el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, exigen necesariamente un proyecto de ley con el preceptivo dictamen del Consejo de Estado (respecto del

que unánime jurisprudencia ha apreciado su inexistencia en normas reglamentarias como vicio de nulidad radical). Una vez más puede apreciarse cómo el RDL que nos ocupa vendría a vulnerar el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución y ello desde una pluralidad de ópticas y afectando a las más variadas ramas del ordenamiento jurídico, como se desarrollará con mayor extensión en otro motivo de recurso.

Pero es que, a mayor abundamiento, mediante el RDL, se infringiría el principio de anualidad presupuestaria consagrado en el artículo 134.2 de la Constitución, dado que vendría a quebrar a mitad de año las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y ello sin seguir el cauce "ordinario" previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados.

Prosiguiendo con nuestra argumentación, cabría añadir que, el establecer la progresividad en la reducción del sueldo, sin ninguna justificación material de fondo (desde el momento en que no se rebaja correlativamente la jornada laboral más a los puestos directivos de la administración que al resto de los funcionarios, puesto que para nada su texto se refiere a la reducción correlativa de la jornada) el RDL está estableciendo una genuina carga de naturaleza tributaria. Sin embargo, el artículo 134.7 de la Constitución impide que la LPGE pueda establecer impuestos, lo cual nos lleva a las consideraciones que son objeto de análisis en un fundamento posterior.

Quinto.- Vulneración de los artículos 14, 35 y 31 de la CE Finalmente, el RDL que nos ocupa vendría a vulnerar el derecho a la igualdad, recogido por el artículo 14 de la Constitución Española, el 35, que garantiza el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia, y el de no confiscatoriedad de los tributos, regulado en el artículo 31 del Texto Fundamental.

En primer lugar, por lo que se refiere a los artículos 14 y 35 de la Constitución Española, ha de apuntarse que las diferencias de sueldo se justifican en las diferentes funciones o trabajo desarrollado por los distintos empleados, de manera que una mayor cantidad y calidad de trabajo (cuyos frutos, mayores y mejores, o, por el contrario, de menor calidad, recibe originariamente el empleador, al tenor de la definición, sustancialmente aplicable al trabajo en el servicio público, del

artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores), realizado con mayores cotas de responsabilidad y dedicación y fundado en un nivel superior de formación se debe corresponder necesariamente con un mayor nivel retributivo.

Pues bien en el RDL, estaríamos ante una progresividad/regresividad discriminatoria, en la medida que se estarían sustrayendo más retribuciones a quienes aportan más al servicio público, a la consecución de los intereses generales de la Nación.

El RDL pretende imponer la progresividad en la reducción al asimilar mayor salario a mayor capacidad económica, lo que no se puede automáticamente, por definición, sostener. Así, tanto la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la doctrina como la jurisprudencia, admiten sin reparos que la capacidad económica relativa a la generación de rentas por el trabajo se debe atemperar por las circunstancias personales y familiares sin que pueda admitirse, sin más, que tiene más capacidad económica sea quien gana más por su trabajo, prescindiendo del análisis del resto de circunstancias jurídicas, económicas, personales y familiares que le rodean.

Las medidas adoptadas por el RDL son discriminatorias porque no está justificado, como exige la jurisprudencia constitucional, para este caso, un trato discriminatorio, fundado en el principio de que situaciones diferentes deben ser tratadas de forma diferente por la Ley. Al contrario, resulta que situaciones iguales (los funcionarios y empleados de los distintos grupos y categorías siguen realizando los mismos cometidos, con la misma dedicación, antes y después de la vigencia del RDL) son tratadas de manera diferente (a unos se les pretende reducir más que a otros el salario, como veremos después, además, de manera profundamente irracional). Cabe señalar, en este sentido las SSTC 235/1992, o las más recientes 181/2000, 91/2000).

De los motivos expuestos (y partiendo de la idea central de que el sueldo retribuye el esfuerzo personal, la calidad y cantidad del trabajo desarrollado, sin diferir en ello de la relación laboral) se desprende que una medida respetuosa con el principio de igualdad supondría una reducción proporcional y no progresiva/regresiva de todos los grupos funcionariales y de todas las categorías profesionales laborales, **ya que se mantiene el mismo trabajo,**

jornada, calidad y cantidad de trabajo realizado para cada uno de los funcionarios de los grupos superiores con respecto al de los grupos inferiores sin que dicha reducción progresiva de sueldo se acompañe de ninguna medida organizativa, invirtiéndose así, drásticamente, en el caso de dicha reducción progresiva, y sin fundamento alguno, la relación entre los frutos del trabajo que la Administración recibe originariamente con lo que retribuye el realizado. A buen seguro que así el pretendido ahorro presupuestario se repartiría de verdad, entre todos, de modo más justo y proporcionado.

Además, dicha reducción que aparentemente se fundamenta, según declaraciones públicas del Presidente del Gobierno, en la máxima de que “soporten más la reducción, quienes más ganan”, carece por completo de lógica interna, puesto que la regulación concreta de la reducción tampoco respeta esos mismos e injustos principios. Veamos en qué porcentajes se realiza dicha reducción, según hoja informativa a los empleados públicos elaborada por el Ministerio de Justicia (que se aportará al recurso contencioso-administrativo y que la Administración a la que me dirijo puede requerir si lo estima oportuno, al ser un documento elaborado por ella misma) la cual, por la propia lógica de las cosas, debe ser igual en el resto de Ministerios y Organismos, al aplicar el mismo RDL:

La reducción progresiva se realiza en las retribuciones básicas (sueldo base y trienios, además de su influencia en la paga extra de diciembre, que veremos después, al tratar la no confiscatoriedad), pero no en las complementarias (complementos específico, de destino y productividad, donde la reducción es fija, proporcional, del 5%), ni tampoco respecto a los empleados públicos con vinculación a través del contrato de trabajo (quienes, sin progresividad ninguna y teniendo los sueldos más bajos de la escala retributiva de las Administraciones, trabajando de ordinario, salvo excepciones, en los Grupos inferiores, ven mermado su salario en el mismo 5% citado). Como se aprecia a primera vista, la reducción para los funcionarios no es ni progresiva, ni proporcional, sino parte y parte.

El Grupo A1 experimenta en sus retribuciones básicas una reducción del 4,5%. El Grupo A2, del 2,7%. El Grupo B, del 2%. El Grupo C1, también del 2%. El Grupo C2, del 0,25%. Y el Grupo E, del 0%, no experimenta disminución. Como digo, si se trata de contrato de trabajo, sin discriminación entre los distintos niveles

retributivos que establece el Convenio Colectivo Único para la Administración del Estado, se aplica el 5% sin más.

Conclusiones: (i) los funcionarios del Grupo A1, que perciben el nivel más elevado de salarios sufren menor deducción, en términos relativos, que los trabajadores vinculados con contrato de trabajo, que tienen sueldos más bajos; (ii) estos mismos funcionarios ven reducidas sus retribuciones, en parte de forma progresiva, en parte de forma proporcional, sin distinción, en este último concepto, con el resto de los funcionarios; (iii) por razones que nos son desconocidas e inimaginables, los funcionarios de los grupos B y C1 sufren la misma deducción proporcional de haberes; y (iv) el Grupo E, que realiza funciones donde también concurren con personal en régimen laboral (que ven sus ingresos mermados en un 5%) no sufre reducción alguna. ¿Puede alguien explicar esto?, ¿lo explica el RDL?. No.

Y ello sin pararnos a considerar las razones que motivan al Gobierno a excluir de la reducción salarial a los afortunados trabajadores de determinadas Entidades Públicas Empresariales y Sociedades estatales a las que se refiere la Disposición Adicional Novena del RDL. O la extravagante reducción de los aranceles de Notarios y Registradores (que no son empleados públicos, aunque realicen funciones de servicio público) en un 5%, al tenor de la Disposición Adicional Octava.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la no confiscatoriedad de los tributos, del artículo 31, conectado directamente con el argumento ya expuesto de respeto a la propiedad privada y a los derechos adquiridos, del artículo 33 de la Constitución Española, la reducción progresiva del salario constituye además, materialmente, un tributo (o visto desde otra perspectiva, una intolerable expropiación de derechos sin indemnización).

Si el Gobierno de la Nación pretendiese que soportasen la crisis económica quiénes más capacidad económica tienen, debería haber creado un tributo o recargo complementario al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre el Patrimonio, y ello por el procedimiento constitucional y legalmente establecido.

La conclusión de lo anterior es que, si el RDL impugnado contiene un tributo encubierto (donde además no se tienen en cuenta las circunstancias concretas y personales de los funcionarios, como debe suceder en el caso de los tributos) podría también llegar a ser confiscatorio, debido a la acumulación sobre el resultado de la reducción salarial de: a) la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dado que, la conjunción entre ambos extremos, podría suponer una pérdida cuantificable, según cada caso, en una parte sustancial de la riqueza que se genera por el trabajo para atender a las necesidades personales y familiares; y b) la subida de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido del 16 al 18% cuya entrada en vigor se realiza precisamente el día 1 de julio de 2010, teniendo presente que dicho gravamen gira sobre los elementos de consumo necesarios para atender las mencionadas necesidades.

El artículo 31 de la Constitución Española señala que:

“1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

El artículo 33 de la Constitución Española reconoce por su parte “el derecho a la propiedad privada”. Y el artículo 35, “el derecho al trabajo” y a “la remuneración en cantidad suficiente”.

Todas estas materias están excluidas, por las mismas razones más arriba apuntadas de las materias que pueden regularse mediante la técnica del RDL.

Finalmente, donde con mayor claridad se aprecia el carácter confiscatorio de la medida es en la reducción que se va a operar en la paga extraordinaria de diciembre de 2010 (cuyos efectos evidentemente, por la propia naturaleza de la reducción, se extenderán a los años venideros), distinguiéndose por Grupos de funcionarios. Según la mencionada Nota Informativa del Ministerio de Justicia, nos encontramos con que los funcionarios del Grupo A1 verán mermada su paga extra en un ¡46,30%!; los del Grupo A2, en un 32,80%; los del Grupo B, en un 17,20%; los del Grupo C1, igual que el anterior, en un 17,20%; los del Grupo E, en sólo un 1,30%. Y los laborales, siguiendo con la irracionalidad del sistema, en un 5%.

Sexto.- Infracción del principio de seguridad jurídica e interdicción de la irretroactividad contenidos en el artículo 9.3 de la CE Finalmente, se produce en el RDL impugnado una vulneración del artículo 9.3 de la CE, en relación con el principio de seguridad jurídica, habida cuenta de que tanto los acuerdos Gobierno-Sindicatos como las previsiones de la LPGE constituyeron derechos consolidados a favor del recurrente, siempre y cuando siga cumpliendo con sus cometidos y responsabilidades, en su puesto de trabajo, durante el año 2010.

Es en este sentido que la LPGE reconoce el derecho a una retribución determinada en cuanto a salario base, trienios, pagas extraordinarias, complemento de destino y específico. Además, como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, (SSTS 26 de octubre de 1994, 19 de diciembre de 1986, 21 de septiembre de 1999, 30 de diciembre de 1998, 14 de octubre de 1996, 19 de febrero de 1996, 29 de mayo de 1995) si bien la Administración puede alterar la estructura retributiva no puede rebajar el sueldo a los funcionarios, que debería consolidarse a través de complementos laborales absorbibles.

Pero en paralelo a la seguridad jurídica y como trasunto de la misma, ha de considerarse también la seguridad económica derivada del anterior. En efecto, y sin perjuicio del carácter hipotético de los siguientes ejemplos, cabría imaginar las consecuencias para la esfera jurídica de los afectados de que, a la vista de las retribuciones previstas para todo el año, se acometieran decisiones económicas familiares (amortización de hipotecas, obras de reforma, compra de una segunda vivienda, cambio de automóvil o cualquier otro gasto ordinario de las familias) que no pudieran posteriormente afrontarse debido al recorte operado por el RDL impugnado, que, como ya hemos visto, al tratar sus porcentajes, no se puede decir que sea pequeño.

Pues bien, lo anterior habría de conectarse con el carácter tributario de la medida adoptada y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca del principio de seguridad jurídica tributaria, según el cual no se puede cambiar el régimen tributario de los impuestos de declaración anual a mitad de ejercicio, ya que las personas físicas y jurídicas planifican anticipadamente las posibilidades de su tributación y de su ahorro fiscal para todo el año, realizando en consecuencia las operaciones económicas y jurídicas de dicho ejercicio.

Es una obviedad decir que la Constitución Española prohíbe la aplicación retroactiva de normas que sean "restrictivas de derechos individuales", respecto de lo que debemos señalar que:

1.- Esta reforma operada por el RDL cercena derechos individuales.

2.- Dichos derechos individuales son derechos subjetivos consolidados, no meras expectativas o "sueños de ganancias".

3.- El RDL se aplica de forma retroactiva, puesto que modifica el articulado de la LPGE, aprobada para regir, con vocación de permanencia, los ingresos y gastos públicos (entre ellos, los de las partidas de personal) durante el ejercicio 2010, modificando sus previsiones (y las de los destinatarios de esos gastos públicos en forma de retribuciones por el trabajo) a mitad de año, quebrando el principio de seguridad jurídica y económica.

Séptimo.- Recapitulación Recapitulando lo anterior, cabe concluir recordando que el fundamento de lo argumentado se refiere a una incompatibilidad profunda y notoria del Real Decreto Ley de 20 de mayo de 2010 con los artículos 9.3, 14, 31, 35, 37, 86 y 134 de la Constitución Española, así como frente a los artículos 132 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, los artículos 31 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, además del resto de los preceptos y artículos invocados en el presente recurso.

Es por la vulneración de éstos por lo que quién suscribe viene a instar, mediante el presente recurso de alzada, la anulación de su nómina, en cuanto a la reducción que supone en sus retribuciones.

Por cuanto queda expuesto,

SOLICITO tenga por realizadas las anteriores manifestaciones y, en su virtud, se sirva anular y dejar sin efecto la nómina del funcionario que suscribe, por lo que se refiere a la reducción operada en las correspondientes partidas retributivas, ordenando se proceda al cobro íntegro de la retribución prevista para el año 2010 en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

Es justicia que pido en Madrid a XX de julio de 2010.

Fdo: D/D^a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX